

AL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Entidad contratante: Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid

Número de expediente: F-LIC-2024/04

Don David ORTIZ MARTÍN, en representación, como apoderado, de la mercantil **RED 2 RED CONSULTORES, S.L.**, como se acredita mediante escritura que se acompaña como DOCUMENTO NÚMERO UNO, y con domicilio a efectos de notificaciones en Calle María Pedraza, 30 Planta, 3ª, 28039 de Madrid, ante esa Consejería comparece y como mejor proceda en Derecho **DICE:**

Que el 13 de noviembre de 2024 he recibido Resolución de adjudicación del contrato privado para la prestación del servicio de auditoría de los programas Moves III y Autoconsumo (PRAAST) financiados con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (PRTR-MRR) de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid.

Ad cautelam y, ante la falta de notificación expresa del Acuerdo de exclusión, habrá de entenderse debidamente interpuesto el recurso contra el acto referido *ut supra* —la Resolución de adjudicación—, que se acompaña como DOCUMENTO NÚMERO DOS. Si bien ya consta en poder de esa Administración, se acompaña asimismo Informe Técnico con el motivo de exclusión, como DOCUMENTO NÚMERO TRES, así como Proposición de admisión y exclusión, como DOCUMENTO NÚMERO CUATRO.

Que, dentro del plazo legalmente establecido al efecto, por medio del presente y en la representación que se ostenta, vengo a interponer

RECURSO DE ALZADA ante la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, al amparo de los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por virtud de los siguientes

M O T I V O S

I.- Jurídico formales

El presente recurso de alzada se interpone por sujeto legitimado, por haber concurrido a la licitación y, en particular, por haber sido excluido de la misma. Asimismo, el recurrente se entenderá sujeto legitimado por constituir su objeto social la prestación de los servicios que se pretenden contratar, como se acredita mediante la escritura de constitución que se acompaña al presente escrito como DOCUMENTO NÚMERO TRES, ostentando en consecuencia un interés directo y legítimo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la vigente Ley de Contratos del Sector Público.

Esta alzada se interpone ante la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, por ser el superior jerárquico, dentro del plazo de UN (1) mes desde la notificación del acto por el que se nos excluye del procedimiento de contratación pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Toda vez que no ha sido dictado ni notificado Acuerdo de exclusión, será recurrible la Resolución de adjudicación, que deja a esta mercantil definitivamente fuera del procedimiento y determina la imposibilidad de continuar en el mismo, luego, ahora sí, nos encontraríamos ante un acto de trámite cualificado.

A la vista de los antecedentes, debe entenderse, por cuanto sigue, que el recurrente dispone de legitimación, y así lo ha entendido el Tribunal administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, en su Resolución nº 46/2016:

«Dicha impugnación puede realizarse recurriendo el acuerdo de exclusión, si ha sido notificado de forma independiente o mediante el recurso contra la adjudicación y su exclusión, cuando sea en este acto en el que se notifique debidamente la exclusión producida.»

En sentido análogo también se ha pronunciado el TACP en la Resolución nº 77/2012:

«La interpretación sistemática de los artículos 40.2.b), 44.2.b) y 151.4, obliga a concluir que la Ley ha establecido en la práctica dos posibilidades de recurso contra los actos de exclusión de licitadores acordados por las Mesas de Contratación: contra el acto de trámite, que puede interponerse a partir del día siguiente a aquél en que el interesado ha tenido conocimiento de la exclusión y contra el acto de adjudicación que puede interponerse en el plazo de quince días desde la notificación de la adjudicación de acuerdo con el artículo 44.2 del TRLCSP, posibilidades que no son acumulativas, sino que tienen carácter subsidiario y así si la Mesa de contratación notifica debidamente al licitador su exclusión del procedimiento, el plazo contará desde el conocimiento de la exclusión; en cambio si no se notifica por la Mesa de contratación formalmente la exclusión, este puede impugnarla en el recurso que interponga contra el acto de adjudicación.»

Por último, procedería incluir también un extracto del Acuerdo 89/2015 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón:

«Este Tribunal administrativo ha mantenido ya en ocasiones anteriores, como en sus Acuerdos 37/2013, de 10 de julio, y 23/2014, de 8 de abril, que si bien la comunicación de los acuerdos de exclusión no resulta obligada por el TRLCSP, son actos de trámite que impiden la continuación en el procedimiento, motivo por el que la Ley permite su impugnación separada, por lo que resulta necesario notificar y explicitar los motivos de la exclusión para evitar indefensión y que la posibilidad de recurso sea real, y no meramente formal.

Pues bien, aunque como se ha señalado, las posibilidades de recurso, frente al acto de exclusión y frente al acto de adjudicación, con carácter general, son alternativas, en este caso -en consideración a la falta de notificación en el momento procesal oportuno del acto de exclusión [...] procede admitir y analizar todos los motivos del recurso. Y ello porque, como se ha señalado, la regla de subsidiariedad tiene como fin último evitar los efectos propios de la "doble acción", lo que no concurre en este caso [...]».

A más, el recurrente ha de entenderse sujeto legitimado toda vez que los anteriores actos son de trámite no cualificados, siendo la Resolución de adjudicación el único acto recurrible. Así las cosas, la inimpugnabilidad de los actos previos no pueden acarrear ahora el efecto negativo entendiendo que esta mercantil no es sujeto legitimado. La única posibilidad es cuestionar el acto definitivo y conclusivo del procedimiento, de modo que se estaría impugnando también los actos de trámite que le hayan precedido y que han sido absorbidos por el posterior acto final.

Ni el Informe Técnico, ni la Proposición de adjudicación, eran actos de trámite cualificados y, al no ser recurribles, tampoco adquieren firmeza en el sentido técnico de los actos administrativos definitivos, ya que no agotan una vía administrativa ni producen efectos plenos.

Simplemente, quedan integrados en el procedimiento, cuya culminación es el acto definitivo.

Entender, en consecuencia, que este recurrente no reúne legitimación suficiente contravendría principios elementales de la Constitución Española en términos de una mínima posibilidad de defensa, estando el acto definitivo —al menos, en este caso— indisolublemente vinculado.

En estas líneas se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otros, en el asunto C-711/19, o en el C-391/15, cuya tesis ha sido utilizada en numerosas ocasiones por los tribunales administrativos de recursos contractuales.

II.- Jurídico materiales

Primero.- Inadecuada exclusión en relación con la interpretación y aplicación de los pliegos y de la memoria técnica:

En relación con la interpretación y aplicación de los pliegos:

Con fecha 1 de octubre de 2024, se presentó oferta detallada a la licitación referida *ut supra*. Posteriormente, el 4 de octubre, se nos requiere para que justifiquemos la oferta anormalmente baja, presentando dicha justificación, que se incorpora como DOCUMENTO NÚMERO CINCO, el 10 de octubre. En relación a esta justificación, se nos requiere de nuevo el 21 de octubre “*Aclaración respecto de las carencias detectadas en la memoria técnica presentada respecto a las actuaciones a llevar a cabo, cronograma, entregables y experiencia del equipo de trabajo asignado en la realización de auditorías de gestión de fondos europeos y de fondos MRR al no ajustarse a lo previsto en el PPT*”

de la licitación”; trámite que se evacuó mediante la memoria técnica ya presentada en el sobre único del procedimiento y las correspondientes aclaraciones que se incorporan a este recurso como DOCUMENTOS NÚMERO SEIS y SIETE. En el DOCUMENTO NÚMERO OCHO encontramos el Acta de Aclaraciones de la Memoria Técnica.

Pero, para entender lo que ha sucedido, es fundamental examinar las bases del contrato.

Por un lado, en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), la primera y única referencia a la memoria la encontramos en el punto 7, que dice lo siguiente:

«Los licitadores deberán presentar dentro del sobre único una Memoria técnica en la que se describan como mínimo las actuaciones a llevar a cabo, metodología, cronograma, entregables y equipo de trabajo asignado incluyendo su dedicación.»

Y por el otro, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), también tenemos una única referencia, sin mayor detalle en relación con la contenida en el PPT. Lo vemos:

«[...] Los licitadores en su oferta deberán incluir la siguiente documentación: Memoria técnica en la que se describan como mínimo las actuaciones a llevar a cabo, metodología, cronograma, entregables y equipo de trabajo asignado ajustado los requerimientos del PPT indicando formación y experiencia [...].»

Visto esto, debemos dirigirnos a la cláusula primera, apartado octavo del PCAP, sobre los criterios objetivos de adjudicación del contrato, donde se identifican dos:

- a) Oferta económica, con un máximo de 70 puntos; y

- b) Criterios relacionados con la calidad evaluables de forma automática mediante fórmulas, con un máximo de 30 puntos.

En ninguna de esas dos secciones se encuentra la memoria técnica, y en la propia cláusula primera, apartado octavo, se refiere a dichos criterios objetivos como cuantificables mediante fórmulas. Por tanto, ya desde ese momento, dicho sea, en estrictos términos de defensa, se produce una contaminación del expediente al mezclar en un sobre único criterios sometidos a juicios de valor con criterios cuantificables mediante fórmulas. Se transcribe a continuación esa referencia:

«Los licitadores en su oferta deberán incluir la siguiente documentación:

- Memoria técnica en la que se describan como mínimo las actuaciones a llevar a cabo, metodología, cronograma, entregables y equipo de trabajo asignado ajustado los requerimientos del PPT indicando formación y experiencia.
- Anexo 1 – Oferta económica
- Anexo 1.B – Criterios objetivos
- Anexo 2 – Declaración responsable múltiple
- Anexo 3 – Declaración responsable en materia de protección de datos Se deberá aportar la documentación necesaria que justifique los criterios objetivos que se oferten por los licitadores.

Se deberá aportar la documentación necesaria que justifique los criterios objetivos que se oferten por los licitadores.»

Lo anterior sin perjuicio de que, además, si volvemos y nos situamos en el criterio b) —de la cláusula primera, apartado octavo—, que se desglosa en: i) *experiencia del jefe de proyecto [...]*, y ii) *experiencia de la empresa [...]*, se dice expresamente que esos extremos

deberían ser acreditados con carácter posterior a la propuesta de adjudicación y mediante un certificado de empresa:

«La experiencia señalada del jefe de proyecto y de la empresa deberá ser acreditada por el propuesto adjudicatario mediante certificado de empresa indicando la relación de trabajos desarrollados por el jefe de equipo y su currículum vitae y una relación de trabajos desarrollados por la empresa iguales o similares a los descritos en el PPT relativos a auditoría de fondos europeos y además certificados de buena ejecución de los mismos emitidos por las administraciones correspondientes.»

La memoria, por lo tanto, no es un criterio de valoración formal — siquiera con 0 puntos—, y, por tanto, se habría cometido un notable vicio de nulidad, dejando al licitador excluido en una situación desconcertante; sobre todo porque no debemos obviar que la memoria que tratamos no estaba dentro de los criterios de adjudicación, por mucho que se quiera relacionar con criterios objetivos. Lo que se ha hecho es un uso indebido y subjetivo de ese elemento, sirviendo como excusa de exclusión.

Y es que estamos ante un *procedimiento simplificado abierto en sobre único*, luego, de conformidad con el artículo 159.4.d) de la Ley de Contratos del Sector Público, es un contrato que, en línea con el PCAP, sólo tiene prevista la valoración mediante aplicación de fórmulas, y no mediante juicios de valor. Para la aplicación de ambos criterios la oferta debía haberse presentado en dos sobres o archivos electrónicos.

Nos anticipamos, sin embargo, si es que se pretendiese plantear de adverso, como es el hecho de no haber impugnado los pliegos, pero lo cierto es que lo que aquí se discute es la inadecuada interpretación y aplicación, con la subsiguiente exclusión de la mercantil RED2RED CONSULTORES, S.L., no habiéndose ajustado a lo previsto en los advertidos; en ningún caso es una impugnación directa o indirecta de

las bases. Ahora bien, y en relación con lo expuesto, el hecho de que un pliego adolezca de vicios de nulidad, cuya identificación hubiera sido inevitablemente posterior —por ejemplo, por una imprevisible actuación del órgano en relación con lo dispuesto en los pliegos—, supone una excepción válida a los principios de buena fe y de seguridad jurídica, y especialmente a la regla general de impugnación autónoma de los pliegos.

Principios que conectan también, volviendo a la ley del contrato, con otros que pueden verse infringidos, como el principio de transparencia y de publicidad de los criterios de valoración, de la mano del artículo 132 de la LCSP, lo cual no sólo requiere que estos estén claramente definidos, sino que el órgano de contratación se ajuste exactamente a lo definido en ellos, sin introducir criterios adicionales durante el proceso. Ello, asimismo, enlaza con la prohibición de la arbitrariedad en la valoración y/o modificación de los criterios de valoración. Cualquier desviación de los pliegos constituye una infracción del artículo 145.3 del Cuerpo Legal que se viene citando, no ajustándose a Derecho la valoración —de forma y de fondo— de aspectos diferentes a los previamente indicados como criterios.

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, en Resolución 332/2018, resolvió en el sentido que se ha abordado:

«En la valoración de los criterios de valoración automática no cabe discrecionalidad alguna por parte de la Administración. Una vez abiertos los sobres que contienen los criterios de valoración automáticos, no puede el órgano de contratación valorar técnicamente la adecuación o coherencia de las ofertas, salvo que dicha valoración se refiera a criterios también objetivos y que consten claramente en el pliego.»

En términos equivalentes se ha pronunciado también el Tribunal, mediante la Resolución 796/2015:

«Debe recordarse que lo que se discute en este litigio es la valoración efectuada en relación con los criterios evaluables mediante fórmulas. Siendo esto así ha de afirmarse que en la valoración de tales criterios no cabe discrecionalidad alguna por parte de la Administración, ni técnica ni de ninguna otra clase, debiendo limitarse la mesa de contratación a aplicar los criterios automáticos sin ningún margen de apreciación técnica o juicio de valor. Como ya se ha señalado por este Tribunal, una vez abiertos los sobres correspondientes a los criterios evaluables mediante fórmula, el resultado de la licitación ya es conocido y en esas condiciones no es posible reconocer discrecionalidad alguna a la mesa de contratación a la hora de aplicar la valoración, pues de otro modo no sería posible garantizar la imparcialidad y objetividad de la misma, fundamento último de la doctrina de la discrecionalidad técnica a que aluden las partes.»

Y en esa senda se alzó de igual modo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su Sentencia de 14 de febrero de 2011 (Recurso 4034/08), ilustrando que la discrecionalidad de la Administración en relación con los criterios automáticos se agota en la redacción del pliego, pues una vez publicado éste carece de discrecionalidad alguna para su aplicación. En consecuencia, es responsabilidad de los poderes adjudicadores establecer en los pliegos las condiciones que determinarán la evaluación de las ofertas en la licitación, de manera que puedan aplicarse según lo especificado en dichos pliegos. No se pueden modificar las condiciones durante el proceso y en función del resultado de la licitación, ya que esto constituiría una clara violación del principio de igualdad.

En relación con la memoria técnica:

La memoria técnica, aquí, es un elemento ilustrativo, e incluso podría decirse que subsidiario, pero en ningún caso excluyente; y sólo podrá ser objeto de valoración subjetiva si así se recoge expresamente en los pliegos, lo que no ocurre.

Aun así, desde RED2RED CONSULTORES, S.L. se desarrolló una memoria suficientemente amplia, cuyo contenido era más que mínimo o básico, partiendo además del hecho de que no se disponía de instrucciones detalladas para llevar a cabo ese ejercicio, lo que colisiona con un principio nuclear, como es el de seguridad jurídica, pues exigir algo que no está razonablemente desglosado, sitúa al licitador en un marco de incertidumbre, en lugar de en uno de confianza, que es la base sobre la que se deben construir las relaciones —contractuales o no— entre Administración Pública y administrados. No resulta aceptable que primero se le dé a la memoria un visible valor supletorio, pero posteriormente peligre la permanencia del licitador en el procedimiento si no cumple con precisión algo impreciso.

Así pues, reunidos los elementos que exigía el pliego para dicha memoria —que veremos un poco más adelante—, se refuerza la consideración de que la exclusión es antijurídica. De hecho, y atendiendo a la naturaleza de lo que aquí se discute, nos recuerda el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en su Resolución 613/2014, que:

«No cualquier incumplimiento ha de suponer automáticamente la exclusión, sino que debe subsumirse en alguna de las causas recogidas en la normativa, interpretarse con arreglo a los principios de igualdad y

conurrencia, y siempre ha de suponer la imposibilidad de la adecuada ejecución del objeto del contrato.»

Por ende, la exclusión, además de apartarse de las bases, lo hace a su vez del artículo 47 de la Ley 39/2015, y con ello, en cuanto ese hecho no se acomoda a la legalidad, nos traslada a un escenario en contravención del mandato constitucional de interdicción de la arbitrariedad.

Por si no fuera suficiente, y en términos más prácticos, en el contenido de la memoria técnica, y a los meros efectos de síntesis, en la siguiente tabla se controla el cumplimiento de esas exigencias mínimas:

Requisitos mínimos	Cumplimiento
Actuaciones a llevar a cabo	Sí; páginas 3 a 6 de la memoria técnica.
Metodología	Sí; páginas 3 a 8 de la memoria técnica.
Cronograma	Sí; páginas 8 y 9 de la memoria técnica.
Entregables	Sí; página 7 de la memoria técnica.
Equipo de trabajo	Sí; páginas 10 a 45 de la memoria técnica.

Uno requisitos superados, que, entre otras cosas y con particular importancia, en ningún extremo del pliego consta la inadaptación o imprecisión del licitador como motivo de exclusión. Y a tal fin resulta oportuno reparar, adicionalmente, en la importancia de la entidad de un incumplimiento; esto es, que el nivel de detalle exigido al licitador ha de ser, como mínimo, el mismo que el de los pliegos, y aquí no se produce ese equilibrio y proporcionalidad.

El Tribunal de Recursos Contractuales de la Comunidad de Madrid hace una referencia a la “gravedad” de los incumplimientos en su Resolución 211/2021:

«A estos efectos se ha de recordar que los motivos de exclusión de los licitadores tienen que estar claramente recogidos en los pliegos que rigen

la contratación o previstos en la LCSP, sin que en el presente caso se constate incumplimiento claro de ninguna prescripción en concreto del PPTP que pueda dar lugar a la grave consecuencia de la exclusión del procedimiento de una licitadora [...].

Sobre la definición y la valoración de las memorias también se ha pronunciado el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, en su Memoria de 2012-2014:

«Si, como afirma el órgano de contratación, la valoración se va a realizar de forma única, ello supone que se va a otorgar a la memoria una puntuación global, a tanto alzado, sin desglose de la valoración o ponderación atribuida a cada uno los aspectos enumerados en dicho criterio (en caso contrario, en este supuesto, se vulnerarían los principios de igualdad y de transparencia). Tal actuación conllevará que los licitadores no podrán conocer, ni antes al no fijarse en los pliegos, ni después al no poder desglosarse la ponderación, la importancia o relevancia que el órgano de contratación atribuye a cada uno de los aspectos a tener en cuenta para la valoración de la memoria técnica; y ello podría ocasionar, a la vista de los numerosos aspectos a valorar, una actuación valorativa que excedería con toda probabilidad la discrecionalidad técnica administrativa admitida y sería rayana con la arbitrariedad.

Por ello, dada la diversidad de los aspectos a valorar en la memoria técnica y la excesiva ponderación máxima que se atribuye a dicho criterio, ha de fijarse en los pliegos unas reglas mínimas de ponderación de cada uno de los aspectos que han de ser objeto de consideración al valorar la memoria técnica.»

Lo esbozado nos lleva a considerar que las deficiencias en la licitación que nos ocupa han conducido a esta mercantil a su —

queremos pensar— involuntaria y/o errónea exclusión del procedimiento.

Segundo.- Inadecuada exclusión contraviniendo la libre competencia y los principios elementales de la contratación pública:

Antes de finalizar, se ha reflexionado brevemente sobre que las exclusiones han de prestar especial atención a los principios de igualdad y concurrencia, y a tal efecto, procede traer a colación la oferta que se presentó, de TREINTA Y OCHO MIL EUROS (38.000,00 €), frente a la de CINCUENTA Y OCHOMIL OCHOCIENTOS EUROS (58.800,00 €) que presentó la mercantil ERNST & YOUNG.

Así, la exclusión de la oferta económicamente más ventajosa, toda vez que la memoria técnica no era motivo tasado de exclusión y a la vista de los artículos 1 y 132 de la LCSP, se traduce en una vulneración de los principios de concurrencia y, particularmente, de lo reconocido en el artículo 145 de la LCSP.

El principio de eficiencia en la contratación pública persigue la adjudicación de los contratos a la oferta económicamente más ventajosa, y a este respecto, habiendo sido excluidos del procedimiento de licitación por una cuestión subjetiva y, además, menor —si es que realmente tiene alguna entidad—, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales —que por numerosas las resoluciones, excusan su cita—, advierde que no ha de perjudicarse sino favorecerse una competencia justa, donde cualquier exclusión requiere la superación de un cuidado examen de proporcionalidad.

Por añadidura, cabría preguntarse qué relevancia tiene, en esa evaluación de proporcionalidad, la mayor o menor minuciosidad de una

memoria técnica, cuando, desde el comienzo, a través de la proposición de ofertas, y a la vista del artículo 139.1 de la LCSP, «[...] supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones [...]».

De no haberse producido la exclusión, lo lógico es que toda clarificación respecto a la metodología de trabajo, el cronograma, o cualquier otro elemento de esa abstracta lista, era algo perfectamente resoluble en un momento posterior al de adjudicación.

Por todo lo cual, **SOLICITO:**

Que se tenga por formulado en tiempo y forma RECURSO DE ALZADA contra la Resolución de adjudicación del contrato privado para la prestación del servicio de auditoría de los programas Moves III y Autoconsumo (PRAAST) financiados con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (PRTR-MRR) de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, y con estimación de este, se acuerde o proceda a dictar Resolución por la que se declare contraria a Derecho la exclusión del procedimiento de contratación objeto de este recurso, dejando sin efectos la Resolución recurrida y, de estimarse también necesario, aquellos actos que la preceden, en la medida que no se impida la retroacción de las actuaciones, admitiendo entonces al recurrente y procediendo subsiguientemente a la evaluación de su oferta, exclusivamente, según los criterios de valoración recogidos en los pliegos, conduciéndonos a la publicación de nueva Proposición de adjudicación a favor de esta mercantil.

PRIMER OTROSÍ DIGO, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 LCSP se solicita la adopción de **MEDIDA CAUTELAR** para la

suspensión del procedimiento de contratación administrativa hasta que se resuelva el presente recurso, y ello ante el grave perjuicio que la continuación de este supondría para el interés general y para el particular de este administrado la adjudicación definitiva.

De no suspender el mismo, nos llevaría a la continuación y adopción de todas las actuaciones y fases, luego, de prosperar este recurso, su ejecución, o de una eventual sentencia, sería de imposible cumplimiento, toda vez que cabe la posibilidad de que la ejecución del contrato ya hubiese llegado a su término, o estuviese próximo a su conclusión.

SEGUNDO OTROSI DIGO, que, para la adecuada resolución del presente recurso, se solicita que, además de los fundamentos expuestos en el mismo, sean también tomados en consideración aquellos que, aun no habiendo sido manifestados de manera expresa por esta sociedad, pudieran estar relacionados con el objeto del recurso y que, en su caso, sean susceptibles de ser apreciados de oficio por la Administración, en aras de garantizar la correcta aplicación de la normativa vigente y la protección de los derechos e intereses legítimos de esta parte.

TERCER OTROSÍ DIGO, que se acompaña a la presente reclamación:

- a) Copia del acto recurrido.
- b) Documentos que acreditan la representación del compareciente y justificación de la legitimación activa para la interposición del presente recurso; esto es la escritura de apoderamiento y de constitución de la sociedad.

En Madrid, a 20 de noviembre de 2024

RED2RED CONSULTORES, SL

David ORTIZ MARTÍN